



Resolución No. CSJCOR21-652
Montería, 30/09/2021

“Por medio de la cual se decide una Vigilancia Judicial Administrativa”

Vigilancia Judicial Administrativa No. 23-001-11-01-002-2021-00535-00

Solicitante: Dra. Zoila Elena Macea Acuña

Despacho: Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Montelíbano

Funcionario(a) Judicial: Dr. Alejandro Elías Paternina Castillo

Clase de proceso: Declaración de unión marital de hecho, disolución y liquidación de sociedad patrimonial por causa de muerte

Número de radicación del proceso: 23-466-31-84-001-2021-00141-00

Magistrado Ponente: Dr. Labrenty Efrén Palomo Meza

Fecha de sesión: 29 de septiembre de 2021

El Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, en ejercicio de sus facultades legales, conforme a lo establecido en el Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, a lo aprobado en sesión ordinaria del 29 de septiembre de 2021 y, teniendo en cuenta los,

1. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud

Mediante escrito radicado el 24 de septiembre de 2021 y repartido al despacho del magistrado ponente el 27 de septiembre de 2021, la abogada Zoila Elena Macea Acuña en su condición de apoderada judicial de la parte demandante, presenta solicitud de vigilancia judicial administrativa contra el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Montelíbano, respecto al trámite del proceso de declaración de unión marital de hecho, disolución y liquidación de sociedad patrimonial por causa de muerte promovido por Lucely Inés Parra Quintero contra Armando José Pérez Herazo y Otros, radicado bajo el No. 23-466-31-84-001-2021-00141-00.

En su solicitud, la peticionaria manifiesta:

“Respetuosamente les suplico que se ejerza la vigilancia especial sobre la petición de la suspensión de la sucesión con radicado 23-466-31-84-001-2021-00132-00 la cual se encuentra en este mismo despacho judicial y en la que pretenden desconocer la existencia de la compañera permanente del fenecido ARMANDU MANUEL PEREZ TIRADO, quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía número 15.039.269, igualmente es de conocimiento público el tráfico de influencias ejercida por el abogado ARMANDO LUIS PEREZ GANDIA, quien es uno de los herederos y esposo de la exfuncionaria de ese mismo despacho la Dra. KATIA MILENA MELENDEZ ARGUMEDO y quienes tienen amistad íntima, con todos los funcionarios de ese despacho judicial.

Mi representada convivió con el causante de forma pública y todos sus herederos tienen pleno conocimiento de la existencia de la compañera permanente, pues durante la convivencia existía una ayuda mutua y compartían lecho, techo y mesa. Es así que el abogado Perez Gandía, en diferentes conversaciones con esta servidora y con mi representada, hizo propuestas del reparto de los bienes, de las cuales existen pruebas.”

2. CONSIDERACIONES

2.1. Planteamiento del problema administrativo

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 6° del Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, esta Corporación debe verificar si existe mérito para disponer la apertura del trámite de Vigilancia Judicial Administrativa o, por el contrario, si lo procedente es archivar la presente solicitud.

2.2. El caso concreto

En su solicitud de vigilancia judicial administrativa radicada el 24 de septiembre de 2021, la abogada Zoila Elena Macea Acuña, en su condición de apoderada judicial de la parte demandante, manifiesta que en el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Montelíbano pretenden desconocer la existencia de la compañera permanente del fenecido Armando Manuel Perez Tirado. Expresa además que *“es de conocimiento público el tráfico de influencias ejercida por el abogado Armando Luis Perez Gandía, quien es uno de los herederos y esposo de la exfuncionaria de ese mismo despacho la Dra. KATIA MILENA MELENDEZ ARGUMEDO y quienes tienen amistad íntima, con todos los funcionarios de ese despacho judicial.”*

Afirma que su representada convivió con el causante de forma pública y todos sus herederos tienen pleno conocimiento de la existencia de la compañera permanente, y que el abogado Perez Gandía hizo propuestas del reparto de los bienes.

Conforme a lo planteado por la peticionaria, se estima que las atribuciones pretendidas escapan de la órbita de competencia de esta Judicatura, pues de conformidad con las facultades descritas en el artículo 101 de la Ley 270 de 1996 y el Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, la función en lo que atañe a los procesos judiciales está encaminada a ejercer un control de términos sobre las actuaciones judiciales, sin que se observe que, en el presente asunto, según lo referenciado por la misma en el escrito petitorio, exista una conducta ineficaz del juez referida a los términos procesales.

Sobre el particular, el Consejo Superior de la Judicatura, mediante Circular PSAC10-53, dispuso que *“al analizarse la competencia atribuida en el artículo 101 numeral 6 de la Ley 270 de 1996 a los Consejos Seccionales, **es claro que apunta exclusivamente a que se adelante un control de términos, en aras de velar por una administración de justicia oportuna y eficaz**, sin que de manera alguna se pueda utilizar este mecanismo para ejercer una indebida presión sobre los funcionarios judiciales, o para influir en el sentido de sus decisiones. No podrán por tanto los Consejos Seccionales – Salas Administrativas - indicar o sugerir el sentido de las decisiones judiciales, la valoración probatoria, la interpretación o aplicación de la ley y en fin nada que restrinja su independencia en ejercicio de la función judicial”*. (Subrayas y negrillas fuera de texto)

Ahora bien, el Acuerdo PSAA11-8716 de octubre 06 de 2011, adopta el reglamento respecto de las Vigilancias Judiciales Administrativas consagradas en el artículo 101 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, y establece en su artículo 1° que éste mecanismo está establecido *“para que la justicia se administre oportuna y eficazmente”* y *“es diferente de la acción disciplinaria a cargo de las Salas Jurisdiccionales*

Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura” (hoy denominadas Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial), lo que lleva a inferir que el estudio de esa institución se ciñe a verificar *i)* cuestiones actuales porque las anomalías pasadas deben ser objeto de los procesos disciplinarios; *ii)* si un (a) servidor (a) judicial incurrió en acciones u omisiones contrarias a la oportuna y eficaz administración de justicia; y *iii)* si un (a) servidor (a) judicial ha actuado en forma negligente o si por lo contrario su tardanza se encuentra inmersa dentro de alguna de las causales de justificación o responsabilidad.

Además, que según lo dispuesto por el Acuerdo en comento la Vigilancia Judicial Administrativa opera cuando un funcionario judicial incurre en prácticas dilatorias o mora judicial injustificada, que atente contra la eficaz y oportuna administración de justicia, situación ésta que conllevaría a la aplicación de una sanción de tipo administrativo.

De todo ello, resulta fácil concluir que el ámbito de aplicación de la Vigilancia Judicial Administrativa apunta exclusivamente, a que se adelante un control y verificación de términos en el desarrollo de las etapas procesales, en procura de una administración de justicia eficaz y oportuna para prever dilaciones injustificadas imputables bien sea al funcionario o empleado del despacho donde cursa el proceso.

En lo que atañe a las posibles o presuntas irregularidades de las que se aqueja la solicitante, es pertinente recalcar que esta Colegiatura debe tener presente el respeto y acato de los principios de autonomía e independencia judicial, consagrados por los artículos 228 y 230 de la Constitución Política Colombiana y el artículo 5 de la Ley 270 de 1996, por lo que no es posible, mediante este mecanismo administrativo, controvertir las decisiones judiciales, ni la forma en que se interpretan las normas en determinado asunto, ni las pruebas que se decretan, ni el valor que se le conceden a estas. Vale precisar que la Vigilancia Judicial Administrativa, no es otra instancia judicial, ni en virtud de ella es posible revivir términos que se hayan dejado vencer por cualquier motivo. Lo anterior es regulado por el Consejo Superior de la Judicatura, en el Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, que a la letra dice:

“Artículo Trece.- Independencia y autonomía Judicial. *En desarrollo de las actuaciones de vigilancia judicial administrativa, los Magistrados de la Sala Administrativa competente deberán respetar la autonomía e independencia de los funcionarios, de tal suerte que en ningún caso podrá sugerir el sentido en que deben proferir sus decisiones.”*

Se ha dicho también, acogiendo reiterada jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional, que a las partes la ley les brinda oportunidades y recursos para controvertir las providencias contrarias a sus intereses y que consideran injustas y opuestas a derecho. A los Consejos Seccionales de la Judicatura no les compete en manera alguna el análisis de las providencias judiciales, ni menos aún, la recta o equivocada interpretación de las normas legales o de procedimiento, para cuyos efectos los códigos establecen los remedios pertinentes. Las decisiones equivocadas y las actuaciones irregulares en que incurren los señores Jueces con motivo del ejercicio de la función jurisdiccional que les está encomendada o la equivocada interpretación de las normas y análisis de los artículos que hagan los señores Jueces escapan por completo al concepto de vigilancia judicial como mecanismo administrativo, pues ésta facultad, la Constitución y la Ley la asignó a las jurisdicciones penal y disciplinaria.

De tal manera que se le hace saber a la peticionaria que le asiste el derecho de concurrir ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba o la Fiscalía General de la Nación, si estima que la conducta desarrollada por el Juez Promiscuo de Familia del Circuito de Montelíbano o por el abogado Armando Luis Perez Gandía, es constitutiva de faltas disciplinarias o de tipificación penal vigente.

Lo precedente conduce a que esta Corporación se abstenga de adelantar el mecanismo de la vigilancia judicial administrativa contra el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Montelíbano, por falta de competencia.

Por tal razón, en consideración a lo anteriormente expuesto, se

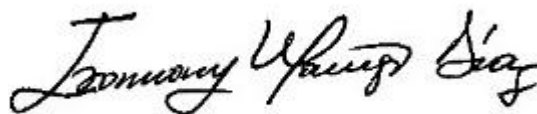
3. RESUELVE

PRIMERO: Abstenerse de adelantar el mecanismo de la Vigilancia Judicial Administrativa contra el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Montelíbano, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

SEGUNDO: Notificar por correo electrónico u otro medio eficaz el contenido de la presente decisión a la abogada Zoila Elena Macea Acuña informándole que contra esta decisión procede recurso de reposición en la vía gubernativa, el que se deberá interponer dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la fecha de notificación o comunicación, ante esta misma Corporación, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Art. 74 y s.s.

TERCERO: La presente resolución rige a partir de su comunicación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ISAMARY MARRUGO DIAZ
Presidente

IMD/LEPM/afac